

Lucero Ramírez León

Las elecciones presidenciales en México: involución democrática y victorias ajustadas vistas desde el caso alemán

A las ocho de la noche del 2 de julio del año 2000, las televisoras mexicanas informaron que, con base en las encuestas de salida (*exit poll*), el candidato Vicente Fox se perfilaba como el ganador de la contienda presidencial. Esta información fue confirmada posteriormente por el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo oficial encargado de vigilar los comicios y hacer el conteo de votos. Para evitar una posible rebelión en el entonces partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el presidente Ernesto Zedillo, apareció en los medios y en forma por demás contundente reconoció la derrota de sus correligionarios. A partir de ahí, los sucesos políticos más importantes se dieron en torno a la agenda del nuevo gobierno.

La historia ha sido distinta seis años más tarde. Casi dos meses después de las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006, aún no se sabía quién es el ganador. Los resultados preliminares indican que el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, obtuvo 15 millones 284 mil votos y su oponente más cercano, Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 14 millones 756 mil 350, lo cual implica una diferencia del 0,58 por ciento. Pese a estos datos, no hay un *ganador* pues ambos contendientes se han autoproclamado triunfadores: el del PAN por esa diferencia preliminar y el del PRD

porque argumenta que esas cifras son producto del fraude organizado desde la Presidencia de la República y con el apoyo de los gobernadores del PAN y del PRI.

Se dibuja un escenario de incertidumbre que parecía superado en México no sólo por el avance registrado en el año 2000, sino porque por primera vez en la historia reciente se organizaba un proceso electoral con un gobierno surgido de la oposición histórica, el PAN, partido que desde su fundación, en 1939, luchó por la democracia en el marco de un régimen autoritario que en tiempos electorales ni siquiera le permitía a sus contendientes hacer campaña política y mucho menos aspirar al triunfo, porque presionaba a los ciudadanos a votar por sus candidatos o porque recurría al fraude. Por tanto, se suponía que si el PAN en la oposición trabajó por la construcción y consolidación de las instituciones democráticas, en el gobierno haría lo posible por coronar sus ideales.

Empero, la incertidumbre que impera en México pasadas seis semanas de las elecciones muestra que el PRI no solamente era un partido político, sino un tipo de cultura política, es decir, una forma peculiar de razonar la lucha por el poder, la cual radica en reconocer a los competidores siempre y cuando no puedan ganar desde la oposición.

No cabe duda que a México le hace falta aprender de otros casos. En Alemania, por ejemplo, la noche del 18 de septiembre de 2005, el resultado electoral no despejó las dudas respecto a quién ocuparía finalmente el puesto de canciller, si el socialdemócrata Gerhard Schroeder o la democristiana Angela Merkel, después de los intentos iniciales y malogrados del primero para conquistar él mismo una vez más la consagración parlamentaria. El problema fue la ajustada victoria que la líder del CDU logró en las elecciones, que

le concedieron sólo tres escaños más que al SPD. El camino hacia el poder fue largo y difícil para los democristianos porque tuvieron que mantener negociaciones con todos los partidos políticos hasta constituir finalmente un gobierno de “gran coalición” con sus principales rivales, los socialdemócratas de Schroeder. Finalmente, el 22 de noviembre el Bundestag alemán eligió a Merkel como la primera mujer canciller en la historia de ese país al obtener el respaldo de 397 votos de los parlamentarios, uno de los porcentajes más altos que haya obtenido ningún canciller.

Más allá de las diferencias entre los regímenes políticos, uno presidencial y el otro parlamentario, la lección aquí es en materia de democracia, confianza ciudadana en las instituciones y equidad en las condiciones de la competencia. Se supone que en sistemas democráticos todos los que entran a competir saben (o debieran saberlo) que pueden perder y, en todo caso, se negocia lo mejor que se puede para terminar co-gobernando. Asimismo, se supone que todos tienen las mismas posibilidades y condiciones para competir. En México no se gana hasta que se negocie el triunfo, y más si es estrecho el margen con el que se obtuvo, o bien, no se pierde sin intentar una extorsión o cobrarle caro el premio al adversario. Construir un gobierno incluyente es prácticamente imposible y hasta mal visto. Es una peculiaridad de la democracia mexicana que no ha podido corregirse por más dinero invertido en la organización de los comicios para que éstos sean claros y transparentes, y lograr así la equidad y la confianza ciudadana en las instituciones (tan sólo en esta elección se gastaron 910 millones de euros).

A los mexicanos les cuesta mucho elegir a su presidente, no sólo por el dinero que se invierte, sino también porque con

incertidumbres como las generadas el 2 de julio de 2006 surge una sociedad marcada por el encono, el enfrentamiento y las posiciones divididas, y otra vez, la falta de confianza en las instituciones. Si bien la jornada electoral fue pacífica y la participación alta –votaron 42 millones de ciudadanos de un total de 73 millones de inscritos en el padrón–, hay indicios de irregularidades para beneficiar al PAN en las que está involucrado hasta el presidente Vicente Fox quien, contra lo establecido en la ley, permanentemente llamó a no votar por el candidato del PRD. La idea era “evitar a toda costa que llegara a la Presidencia”, reconoció Jorge Castañeda, intelectual mexicano formado políticamente en el Partido Comunista, pero adherido al foxismo y quien fungió como ministro de Relaciones Exteriores entre 2000 y 2003. Dijo sin rubor alguno que al candidato perredista “había que ganarle a la buena o a la mala”.

El conjunto de estas acciones, llevaron al candidato del PRD a desconocer los resultados de la votación, a declarar que él había ganado la elección y a presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –órgano encargado de atender las impugnaciones en los procesos electorales– para que ordenara el recuento “voto por voto” de las más de 130 mil casillas. Instaló campamentos en el Zócalo y en un segmento de la avenida Reforma, una de las principales vías de la capital, lo que ha generado caos vial y trastornos económicos por ser zona turística y de negocios.

El contexto del encono

La tensión poselectoral que se vive actualmente en el país, puede explicarse por razones de tipo histórico y otras de carácter coyuntural. Tiene un significado

histórico porque desde que apareció la izquierda en forma de partido, en 1919, había la posibilidad real de triunfo electoral en la Presidencia. Otro factor histórico es que por primera vez en décadas, la izquierda mexicana contaba con un liderazgo con capacidad de convocatoria nacional, mucho mayor que la de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. López Obrador a diferencia de Cárdenas, consiguió apoyos en sectores de estratos medios y altos de la población y articuló esos apoyos en redes ciudadanas que se convirtieron en promotores eficaces del voto. Así, el PRD, en coalición con el Partido del Trabajo y Convergencia Democrática consiguió triplicar su techo histórico: de cinco millones de votos obtenidos en las contiendas presidenciales de 1994 y 2000, en esta ocasión consiguió casi 15 millones.

Entre los factores de tipo coyuntural, se cuentan los pocos avances económicos logrados por la administración foxista y los escándalos de corrupción en el que se ha visto involucrada Marta Sahagún, esposa del mandatario, desde cuya posición constituyó la Fundación Vamos México que utilizó recursos públicos de manera ilegal para promover una imagen de mujer caritativa, lo que supuso su promoción para convertirse en candidata presidencial del PAN, o bien, el caso del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, quien pactó con un traficante de drogas apodado “El Azul” para que éste no cometiera secuestros o asaltos en Morelos, a cambio de impunidad y protección para extender sus redes de narcotráfico en la entidad y en zonas vecinas como el Distrito Federal y los estados de México y Guerrero.

Fox también mostró incapacidad para establecer acuerdos con el Poder Legislativo en materias fundamentales. No logró apoyos suficientes para aprobar la Ley de Pueblos Indígenas; la reforma energética;

la reforma laboral y la reforma fiscal.

Al mismo tiempo, se generó la impresión de incapacidad gubernamental para hacer valer la autoridad y aplicar la ley sin afectar los derechos ciudadanos. El caso más relevante fue el intento por construir un nuevo aeropuerto alternativo al de la Ciudad de México en un poblado llamado San Salvador Atenco, situado a 50 kilómetros de la capital. Los vecinos del lugar se opusieron al proyecto cuando supieron que sus tierras de siembra serían compradas a 7 pesos por metro cuadrado (el equivalente a 50 centavos de euro), mientras que la inversión alcanzaba los 6 mil millones de dólares.

Los pobladores bloquearon carreteras, desafiaron a la policía con machetes y secuestraron a empleados del gobierno que acudieron para negociar la solución del conflicto. Con el propósito de evitar que el problema aumentara, el gobierno federal decidió cancelar el proyecto. Este fenómeno dio lugar a que se denominara el “síndrome de San Salvador Atenco” cuando el presidente era desafiado y derrotado después de haber tomado una decisión.

Las alternativas en disputa

En este escenario, las elecciones presidenciales de 2006 mostraron esencialmente tres alternativas: la del PAN que representaba la continuidad de lo que había sido el gobierno del presidente Fox; la del PRI que significaba el regreso de los políticos tradicionales de ese partido al poder; y la del PRD, que se presentaba como una opción política con disposición a promover una economía que garantizaba el apoyo a los grupos sociales más pobres.

El primero de los candidatos en comenzar la campaña, fue López Obrador. Desde su posición como alcalde de la Ciu-

dad de México aprovechó para destacar que el PAN, el presidente Fox y el PRI representaban a los privilegiados y era viable construir un proyecto alternativo al neoliberalismo y a favor de los pobres. Y con el eslogan “Por el bien de todos, primero los pobres” se construyó una imagen del candidato “de la esperanza”. Dio golpes de “alto impacto” mediático como el hacer público que su sueldo era tres veces menor al del presidente Fox (7.000 dólares vs. 25.000 dólares mensuales). Promocionó grandes obras públicas (que contrastaban con el síndrome San Salvador Atenco); puso en marcha una política social para subsidiar a los ancianos, a las madres solteras y a los microempresarios.

Como gobernante de la Ciudad de México no estuvo exento de críticas y se le cuestionó su incapacidad para resolver el problema de la inseguridad y los secuestros en la capital. López Obrador consideró esas crítica como un “complot” de los poderosos y eludió responsabilidad en los actos de corrupción en los que se vieron involucrados funcionarios muy cercanos a él. Todas estas actitudes dieron pie para que sus adversarios lo calificaran de autoritario y fue comparado con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez por su proclividad a descalificar a sus oponentes y subvertir el orden legal si no le es favorable.

Durante su campaña se vendió como el candidato de “la esperanza”, evitó pactar con grupos empresariales y más bien los ignoró e incluso los desafió, seguro siempre de ir arriba en la contienda, a 10 puntos porcentuales sobre sus más cercanos competidores. Su estrategia fue siempre la misma, polarizar e insistir que él representaba a los pobres y el PRI y el PAN a los poderosos. En abril no asistió al primer debate entre los candidatos presidenciales argumentando que el primer lugar ya estaba definido y que en ese encuentro se definiría el segundo. Por tal

motivo, se negó en un principio a responder a la “campaña negra” en su contra que empezó el PAN a partir de mayo en los medios televisivos donde lo relacionaban con el caos. Todo esto se configuró como el voto del miedo y el voto del odio. La campaña tuvo efecto, particularmente entre los indecisos y los sectores medios, y cuando López Obrador quiso responder denunciando al candidato de la derecha por nepotismo, era demasiado tarde.

Por su parte, Felipe Calderón construyó su candidatura contra todos los pronósticos dentro del mismo PAN desafiando incluso al presidente Fox, quien primero promovió, en forma soterrada, la candidatura de su esposa, Marta Sahagún, y después abiertamente la de Santiago Creel, su secretario de Gobernación, cuya gestión al frente de dicha dependencia se considera ineficiente. Contra todo pronóstico, Calderón se hizo con la candidatura y tuvo la habilidad de agrupar a diversos funcionarios y gobernantes panistas inconformes con el foxismo, aunque su éxito fue aliarse con banqueros, empresarios, grupos separados del PRI y especialmente con los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que integran a un millón 200 mil trabajadores.

La polarización PAN-PRD se da en un contexto donde el PRI se desdibuja del panorama políticos tras más de 70 años en el poder. Luego de divisiones internas en el priísmo y enfrentamientos abiertos entres sus dirigentes, el partido se quedó sólo con el 22 % de la votación en la elección presidencial y consiguió 103 diputados federales, es decir, se convirtió en la tercera fuerza electoral del país.

Hasta el cierre de este artículo y seis semanas después de las elecciones presidenciales, México sigue sin saber quién es oficialmente el nuevo jefe del Ejecutivo Federal. López Obrador ha llamado a la

insurrección después de que el Tribunal Electoral Federal no ha definido al ganador y los panistas no dejan pasar un día sin hacer campaña en su contra tildándolo de provocador, enfermo de poder y agitador. Irremediablemente esto puede afectar la posición electoral del PRD en las elecciones intermedias de 2009 y acabar con su capital político que implica tener más de la tercera parte de los votos. No cabe duda de que México requiere lecciones de cómo negociar en situaciones de crisis electoral, cuando los márgenes de las victorias son estrechos, porque si se quiere seguir por la senda de la democracia, los políticos tienen que aprender a negociar y a co-gobernar.

Quizá la clave está en la posibilidad de formar coaliciones de gobierno, como fue el caso de CDU y SPD en Alemania. Pese a que estas dos fuerzas políticas representan posiciones ideológicas opuestas, pudieron hacer una agenda común de co-gobierno en asuntos temáticos clave para el futuro inmediato de Alemania. En muchos sentidos, estos acuerdos atenúan los costos de la derrota electoral y acotan las posibilidades del triunfador. En cambio, en México, el PRD, al parecer pierde todo y no hay garantías institucionales de que desde el poder se incluya su agenda partidista. En estos términos el ganador se lo lleva todo y además asegura en buena medida su continuidad; y el perdedor se queda solo igual que sus votantes.

Lucero Ramírez León. Aspirante al grado de doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, España, con la tesis "La especialización de los legisladores: alternativa latinoamericana para fortalecer el control parlamentario sobre el gobierno. Contribuciones al estudio de la profesionalización de las carreras parlamentarias". En el primer semestre de 2006 realizó una estancia de investigación en el GIGA Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo, Alemania.

Günther Maihold

México: la elección en disputa. Retos para el nuevo gobierno de Felipe Calderón

Mientras algunas naciones latinoamericanas podían enorgullecerse de haber tenido el mayor número de presidentes en funciones en un lapso temporal muy corto, México está viviendo, después de las elecciones del 2 de julio de 2006, la paradójica situación de disponer de dos presidentes al mismo tiempo: por un lado el oficialmente declarado "presidente electo" el día 5 de septiembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa; por el otro lado a Andrés Manuel López Obrador, quien se proclama "presidente legítimo" apoyado por una convención democrática en el Zócalo de la capital el día 16 de septiembre del mismo año. A su vez, el presidente en vísperas de terminar su sexenio, Vicente Fox, estará en funciones hasta el 30 de noviembre.

Desde el año 2000 lidera un gabinete "de cambio" en base al primer gobierno que no fue emanado por el PRI, después de una hegemonía de casi 71 años. Sin embargo, la crítica suscitada respecto al resultado electoral —con una diferencia de 0,56% entre el presidente electo y el presidente legítimo—, ha enfocado su crítica hacia el presidente Vicente Fox, a quien denuncia el líder opositor de "traidor a la democracia". Aunque se pueda atribuir gran parte de la crítica al calor de la campaña electoral que fue prolongada en una campaña pos-electoral, llama mucho la atención que el presidente Fox se haya convertido en el blanco de las críticas de López Obrador. En esencia, lo anterior puede atribuirse al proceso del desafuero al cual fue sometido López Obrador cuan-